



Asamblea General

Distr. general
14 de marzo de 2017
Español
Original: inglés

Consejo de Derechos Humanos

34º período de sesiones

27 de febrero a 24 de marzo de 2017

Tema 4 del programa

**Situaciones de derechos humanos que
requieren la atención del Consejo**

Informe de la Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar* **

Nota de la Secretaría

La Secretaría tiene el honor de transmitir al Consejo de Derechos Humanos el informe de la Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar, elaborado de conformidad con la resolución 31/24 del Consejo. Pasado casi un año desde que asumió el poder el nuevo Gobierno, este sigue encontrando enormes dificultades en el ámbito de los derechos humanos. En el informe la Relatora Especial se basa en informes anteriores para determinar algunas de esas dificultades y presentar recomendaciones al respecto.

* Este informe se presenta con retraso para poder incluir en él información sobre los hechos más recientes.

** El anexo del presente informe se reproduce como se recibió, en el idioma en que se presentó únicamente.

GE.17-04106 (S) 270317 280317



* 1 7 0 4 1 0 6 *

Se ruega reciclar



I. Introducción

1. La Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar, Yanghee Lee, ha preparado el presente informe, dirigido al Consejo de Derechos Humanos de conformidad con la resolución 31/24 del Consejo, tras los informes presentados al Consejo, en marzo de 2016 (A/HRC/31/71), y a la Asamblea General, en agosto de 2016 (A/71/361). En el presente informe la Relatora Especial pasa revista a las dificultades que encuentra el nuevo Gobierno, en funciones desde marzo de 2016, en el ámbito de los derechos humanos y señala los progresos que ha realizado.

2. La Relatora Especial visitó oficialmente Myanmar por quinta vez del 9 al 20 de enero de 2017¹. Aunque solicitó que la visita durara 14 días, el Gobierno solo le permitió 12 días en el curso de los cuales viajó a partes de los estados de Kachín, Mon y Rakáin, así como a Yangon y Nay Pyi Taw. La Relatora Especial transmite al Gobierno su agradecimiento por la cooperación desplegada, especialmente al acceder a su solicitud de reunirse con miembros de las comunidades de aldeas y campamentos de desplazados internos del estado de Rakáin sin ser objeto de una vigilancia estrecha por parte de funcionarios públicos o del personal de seguridad. Sin embargo, lamenta la escasa antelación con que repetidas veces se atendieron sus solicitudes de visitar determinados lugares. Se trató de una pauta recurrente caracterizada por denegaciones de última hora que la obligaron a reorganizar su programa en el último momento, lo cual le impidió optimizar a fondo el poco tiempo del que disponía.

3. Basándose en las reuniones y conversaciones mantenidas con la Consejera de Estado y con distintos funcionarios públicos y parlamentarios, la Relatora Especial reconoce el compromiso y la dedicación genuinos del Gobierno en su afán por mejorar la vida de toda la población de Myanmar. Sin embargo, ese compromiso todavía no se ha traducido del todo en hechos reales cuyos efectos se sientan sobre el terreno, como se desprende de la impresión de desesperanza que ha empezado a expresar el ciudadano común.

Elaboración de puntos de referencia conjuntos

4. Como se le encomienda en la resolución 31/24 del Consejo de Derechos Humanos, la Relatora Especial ha redactado propuestas de puntos de referencia conjuntos para medir los progresos (véase el anexo). El proyecto de puntos de referencia conjuntos, remitido al Gobierno tres semanas antes de su visita de enero de 2017, se adjuntó asimismo a la lista de temas de debate enviada antes de sus reuniones celebradas en Nay Pyi Taw. La Relatora Especial observa que solo dos ministerios accedieron a examinar de forma sustantiva las propuestas. Espera poder examinar los puntos de referencia propuestos, así como los que surjan del presente informe, con anterioridad a su próxima visita al país a fin de acordar una serie de puntos de referencia conjuntos que sirvan para medir los avances. También de conformidad con la resolución, la Relatora Especial procuró definir esferas prioritarias para la asistencia técnica y el fomento de la capacidad; en las recomendaciones del presente informe puede consultarse una lista no exhaustiva de algunas esferas sugeridas por los interlocutores.

II. Situación de los derechos humanos

A. Estado de derecho

1. Reforma legislativa y constitucional

5. La Relatora Especial celebra el empeño puesto en derogar o modificar legislación donde figuran disposiciones incompatibles con los derechos fundamentales y recuerda que

¹ La lista de reuniones figura en el anexo de la declaración de fin de misión de la Relatora Especial. Disponible en www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21107&LangID=E.

antes ya había enumerado muchas leyes de ese tipo (véase A/HRC/31/71, anexo). Celebra en particular que se derogara la Ley de Protección del Estado (1975) en mayo de 2016 y la Ley de Disposiciones de Emergencia (1950) en octubre de 2016 y que en noviembre de 2016 se modificara la Ley de Administración de Distritos Urbanos o Rurales (2012) a efectos de eliminar el requisito de notificación obligatoria de los huéspedes que pernoctan. También celebra que se haya eliminado el requisito de solicitar permiso para celebrar manifestaciones, al igual que otra serie de disposiciones problemáticas, tras la modificación de la Ley de Reuniones y Manifestaciones Pacíficas (2011), pero observa que se han mantenido las sanciones penales. Espera que puedan rectificarse esas deficiencias.

6. La Relatora Especial toma nota de la decisión de redactar una ley sobre seguridad privada y protección de los ciudadanos. La vaguedad de las disposiciones en materia de difamación podría plantear problemas. Aunque el actual proyecto de ley prevé que la vigilancia dimane de una “orden que se ajuste a lo dispuesto en la ley”, actualmente no existe ley alguna al respecto. La Relatora Especial recomienda que se prepare un marco jurídico para la vigilancia de conformidad con las normas internacionales y en consulta con expertos.

7. Como ya ha señalado antes la Relatora Especial, urge contar con una ley enérgica sobre violencia contra la mujer para subsanar los puntos débiles del actual marco legislativo. Le preocupa la información de que en la versión más reciente de la ley de protección de la mujer y prevención de la violencia contra la mujer se han eliminado disposiciones esenciales, como las relativas a la definición de violación, el tribunal especial de violencia de género, la violencia sexual en los conflictos, la violencia ejercida por funcionarios públicos y la creación de capacidad en la Fiscalía General y en el Tribunal Supremo. Pide que se restituyan esas disposiciones y que se apruebe la ley de inmediato.

8. La Relatora Especial celebra las disposiciones del proyecto de ley sobre los derechos del niño que elevan el grado de cumplimiento por Myanmar de sus obligaciones internacionales. Entiende que es probable que el proyecto de ley se presente en breve al Parlamento y subraya la importancia de mantener disposiciones esenciales sobre la prevención del reclutamiento de niños por las fuerzas armadas y sobre la edad mínima de responsabilidad penal.

9. La Relatora Especial celebra la decisión adoptada por el Ministerio del Interior a efectos de empezar a elaborar un texto completamente nuevo del proyecto de ley penitenciaria y espera que este se ajuste a las normas internacionales en la materia y se redacte en cooperación con las partes interesadas. Alienta al Ministerio a que recabe asistencia técnica sobre el particular.

10. La Relatora Especial sigue preocupada por las cuatro leyes que conforman el conjunto legislativo denominado de protección de la raza y la religión, aprobado en 2015 (véase A/HRC/28/72, párrs. 28 y 29). Al respecto, celebra las observaciones del parlamentario Mya Thaung en el sentido de que esas leyes deben armonizarse con el proyecto de ley de protección de la mujer y prevención de la violencia contra la mujer. La Relatora Especial reitera que esas leyes se apartan de las obligaciones internacionales de Myanmar e insta al país a que rectifique sus deficiencias.

11. La Relatora Especial toma nota de la decisión del Gobierno de redactar una ley sobre el discurso de odio que trate de la instigación a la discriminación y la violencia, a la vez que proteja la libertad de expresión. Sin embargo, le preocupa que todavía no se haya presentado a consulta pública el proyecto de ley y que varias disposiciones propuestas no respeten las normas internacionales. Pide que se proceda a mantener consultas serias a fin de revisar el texto para remediar esa situación a la vez que reitera como referencia útil el Plan de Acción de Rabat sobre la prohibición de la apología del odio nacional, racial o religioso que constituye incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia.

12. La Relatora Especial y sus predecesores han señalado antes que la Ley de Ciudadanía (1982) no respeta las normas internacionales (véanse A/69/398, párrs. 12 y 53, y A/HRC/25/64, párrs. 49 y 83 f), en particular en la medida en que contiene disposiciones discriminatorias para conceder la ciudadanía en función de la etnia o la raza. El 27 de diciembre de 2016 la Consejería de Estado emitió una notificación en la que se exponía el fundamento jurídico y el objetivo perseguido en relación con la tarjeta de identidad para la

verificación nacional, documento exigido para solicitar la ciudadanía si el solicitante carece en ese momento de tarjeta de identidad. Aunque se expiden tarjetas de identidad para la verificación nacional de conformidad con la Ley de Registro de Residentes de 1949 y las normas conexas de 1951, los derechos de que gozan los titulares de tarjetas de identidad difieren de los correspondientes a los titulares de tarjetas nacionales de registro (tarjetas de tres secciones dobladas) expedidas con arreglo a la misma Ley.

13. Además de indicar con claridad que la tarjeta de identidad para la verificación nacional solo se expide a efectos de determinar si el titular reúne las condiciones para optar a la ciudadanía de conformidad con la Ley de Ciudadanía de 1982, la notificación declaraba en concreto que: a) los titulares de tarjetas pueden desplazarse por cualquier parte del país conforme a las leyes, órdenes e instrucciones regionales de su respectivo gobierno estatal; b) los titulares de tarjetas del estado de Rakáin pueden desplazarse con libertad por su municipio de residencia y dentro del propio estado conforme a las leyes, órdenes e instrucciones regionales promulgadas por el gobierno estatal; y c) los titulares de tarjetas del estado de Rakáin pueden entrar legalmente en Bangladesh con pases fronterizos.

14. Cabe recordar que, tras anunciarse que todas las tarjetas de registro temporal (tarjetas blancas) expirarían el 31 de marzo de 2015, se entregaron unas 470.000 tarjetas de ese tipo de las cerca de 760.000 expedidas inicialmente. Aunque la mayor parte de las tarjetas entregadas (casi 400.000) procedía de Rakáin, el resto procedía principalmente de los estados de Shan, Kayin y Mon, así como de las provincias de Tanintharyi, Bago y Ayeyarwaddy. Son notables las condiciones específicas aplicables a los titulares de tarjetas residentes en el estado de Rakáin, especialmente su aparente derecho a entrar en Bangladesh, pero no a desplazarse con libertad en el estado de Rakáin y el resto de Myanmar.

15. La Relatora Especial ya ha observado que son muchos los que ven con escepticismo la labor de verificación de la ciudadanía. Entre junio de 2015 y diciembre de 2016 se expidieron en el estado de Rakáin algo más de 600 tarjetas de identidad para la verificación nacional, frente a las casi 26.000 expedidas en el resto del país. Ello se debe, entre otras cosas, a la falta de consultas con las comunidades afectadas, a raíz de la cual estas se quedan sin entender el proceso, y a las constantes limitaciones al ejercicio de los derechos por parte de los ciudadanos reconocidos como tales en virtud del proceso. Como consecuencia, la mayoría de la población rohinyá y otras minorías no nacionales dependen de la lista de integrantes de los hogares, de carácter obligatorio, como única prueba actual de su residencia legal en Myanmar.

16. Preocupan en particular a la Relatora Especial las noticias de que se obliga a los rohinyá y a otros grupos a solicitar tarjetas de identidad para la verificación nacional. Por ejemplo, ahora hay que estar en posesión de la tarjeta para solicitar una licencia de pesca y autorizaciones de viaje. La Relatora Especial reitera su anterior llamamiento a reformar la Ley de Ciudadanía y los procesos conexos.

17. La Relatora Especial sigue preocupada por la opacidad del proceso de elaboración legislativa y reitera sus anteriores recomendaciones (véase A/71/361, párrs. 22 y 98 b)). Podría estudiarse la redacción de una ley sobre elaboración legislativa en la que se estableciera un proceso coherente que incorporara consultas sistemáticas y serias.

18. La Constitución sigue siendo obstáculo al logro de una democracia plena. Son especialmente preocupantes las disposiciones que no conducen efectivamente a la supervisión civil del ejército y mantienen una influencia y participación notables del ejército en el Parlamento y en el poder ejecutivo. En ese sentido, la Relatora Especial está firmemente convencida de que Myanmar todavía no es un país provisto de un Gobierno verdaderamente civil. Aunque entiende que las deliberaciones sobre posibles modificaciones constitucionales siguen siendo políticamente delicadas, subraya la importancia que tienen para el proceso de reforma. Observa que todo proceso de revisión llevará tiempo y exigirá un esfuerzo considerable para recabar la contribución de todas las partes interesadas. En consecuencia, sugiere que se plantee la posibilidad de establecer un comité preparatorio encargado de estudiar posibles procesos de revisión.

2. Administración de justicia

19. La fortaleza del poder judicial y la independencia de los abogados son aspectos fundamentales del estado de derecho. Sigue costando a los abogados llevar a juicio a intereses poderosos, y algunos denuncian que son objeto de intimidación o que se llevan contra ellos acciones judiciales². La Relatora Especial alienta a que se reforme la Ley del Consejo de la Abogacía (1989) para ajustarla a los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados.

20. También es preciso seguir fortaleciendo el poder judicial. La Relatora Especial alienta a que prosiga la acción orientada a aplicar el Plan Estratégico (2015-2017) del Tribunal Supremo y ajustar el sistema de designación de jueces a los Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura. Observa que la corrupción judicial sigue planteando problemas y reitera su llamamiento a adoptar medidas para ponerle coto (véase A/HRC/31/71, párr. 16).

21. Durante su reciente visita a Myanmar, la Relatora Especial visitó un campamento de trabajos forzados del estado de Mon. Le preocupaba el uso de grilletes como elemento de castigo adicional, incluso cuando los presos trabajaban en canteras, así como la falta de transparencia en cuanto a la manera de seleccionar a los presos para trasladarlos al campamento. Observó que ese campamento y las cárceles de todo Myanmar carecían de un sistema independiente de presentación de denuncias por los presos. También observa que se había notificado la práctica de aprovechar el trabajo penitenciario en beneficio de empresas privadas, lo cual entraría dentro de la definición de trabajo forzoso que figura en el Convenio sobre el Trabajo Forzoso, 1930 (núm. 29), de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Espera que la nueva ley penitenciaria se ocupe de esos problemas, en particular teniendo en cuenta las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (las Reglas Nelson Mandela).

22. La administración de justicia comporta la investigación de las violaciones de los derechos humanos; la Relatora Especial recuerda a Myanmar sus obligaciones de investigar sistemáticamente todas las acusaciones. Observa que, aunque la determinación de si una persona es culpable incumbe al poder judicial, corresponde al Gobierno la obligación previa de realizar “investigaciones rápidas, minuciosas, independientes e imparciales” que sean dignas de crédito³. La Relatora Especial observa que Myanmar ha establecido algunos órganos de investigación que no cumplen esos requisitos. Asimismo, observa que, en el caso de las muertes ilícitas, el principio 11 de los Principios relativos a una Eficaz Prevención e Investigación de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias exige que, si las investigaciones iniciales son insuficientes, “los gobiernos llevarán a cabo investigaciones por conducto de una comisión de encuesta independiente o por otro procedimiento análogo”.

B. Espacio democrático

23. La Relatora Especial reconoce que en años recientes Myanmar ha avanzado en la apertura de un espacio democrático. Sin embargo, todavía le preocupa que se sigan aplicando disposiciones jurídicas problemáticas, sobre todo en casos políticamente delicados, para intimidar y silenciar a defensores de los derechos humanos, abogados, periodistas y miembros de la sociedad civil, en particular sometiendo a vigilancia intensa, detenciones y enjuiciamientos. El asesinato el 29 de enero de 2017 del experto en cuestiones jurídicas constitucionales Ko Ni transmite un mensaje especialmente estremecedor a quienes luchan por los derechos de otras personas y se expresan en su nombre.

24. Como se ha indicado antes, pasan los años y siguen sin resolverse de forma concluyente varios casos, como el del asesinato del reportero Ko Par Gyi en octubre de 2014. Asimismo, cada vez corren mayor peligro quienes se ocupan de cuestiones

² El abogado Khin Kyaw sigue acusado conforme al Código Penal. Véase A/71/361, párr. 24.

³ Véase el conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad (E/CN.4/2005/102/Add.1), principio 19.

ambientales o relativas a los derechos sobre la tierra, como ocurrió con la activista Naw Chit Pan Daing y con el periodista Soe Moe Tun, asesinados en noviembre y diciembre de 2016, respectivamente.

25. La Relatora Especial expresó durante sus reuniones preocupación por que se hubiera rescindido el contrato de Fiona MacGregor con el *Myanmar Times*, al parecer por haber escrito de presuntas infracciones relacionadas con las operaciones de seguridad llevadas a cabo en el estado de Rakáin. Aparentemente, había sido objeto de especial atención por haber informado activamente de casos de violencia sexual en los que presuntamente estaban implicadas fuerzas de seguridad.

26. Se ha informado a la Relatora Especial de que se ha encarcelado a unas 170 personas por ejercer pacíficamente sus derechos a la libertad de opinión y de expresión y de asociación y reunión⁴. Le parece especialmente preocupante el recurso cada vez más frecuente al artículo 66 d) de la Ley de Telecomunicaciones (2013), al amparo del cual se denunciaron más de 45 casos, la mayor parte el pasado año.

27. La Relatora Especial se reunió durante su visita de enero de 2017 con personas a las que se había detenido al amparo de esa disposición por expresar opiniones contra el ejército, entre ellas Hla Phone (Kyat Pha Gyi), a quien se había condenado a dos años de cárcel⁵, y Myo Yan Naung Thein, cuya causa sigue abierta. El 6 de enero de 2017, dos días antes de que la Relatora Especial llegara a Myanmar, se puso en libertad bajo fianza a Than Htut Aung, Director General del grupo Eleven Media, y a Wai Phyo, Redactor Jefe del periódico *Daily Eleven*, a quienes se habían imputado cargos de conformidad con el artículo 66 d) en relación con un editorial en el que se acusaba de soborno al Ministro Principal de Yangon, después de que antes se les denegaran tres solicitudes de puesta en libertad bajo fianza. Se le informó de otros casos relativos a críticas dirigidas contra el Presidente, Htin Kyaw, y la Consejera de Estado, Aung San Suu Kyi, pero las limitaciones de tiempo le impidieron visitar los centros de detención en cuestión.

28. La Relatora Especial también se reunió con Htin Kyaw y Khaing Myo Tun, a quienes se habían imputado cargos de conformidad con los artículos 505 a) y 505 b) del Código Penal, respectivamente, en relación con acusaciones dirigidas contra el ejército. En el caso de Htin Kyaw, también se le imputaron cargos con arreglo a la Ley de Reuniones y Manifestaciones Pacíficas de 2011 y se le condenó en febrero de 2017 a dos meses de cárcel.

29. La Relatora Especial ya ha expresado preocupación por que la Ley de Reuniones y Manifestaciones Pacíficas de 2011 no tolere las congregaciones espontáneas. No obstante, es desconcertante la noticia de que el 4 de febrero de 2017 se detuvo a un único estudiante de medicina a quien se imputaron cargos conforme a la Ley por expresar apoyo a la paz, considerando que en la Ley se define toda reunión como congregación de “más de una persona”.

C. Desarrollo y derechos económicos, sociales y culturales

1. Derechos económicos, sociales y culturales y derechos relacionados con la tierra

30. La Relatora Especial considera que el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales es fundamental para asegurar que nadie se quede atrás en el proceso de desarrollo. Exhorta al Gobierno a que ratifique el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que, junto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, puede servir de marco integral para la labor que se emprenda en este ámbito.

31. El trabajo infantil sigue estando generalizado en Myanmar, donde lo padecen 1,1 millones de niños. Preocupaba especialmente a la Relatora Especial el reciente caso de dos niñas a las que se obligó a trabajar y se sometió a malos tratos en una sastrería de Yangon.

⁴ Véase Asociación de Ayuda a los Presos Políticos (Birmania), “January Chronology 2017”. Disponible en <http://aappb.org/2017/02/aapp-b-monthly-chronology-of-jan-2017-and-current-political-prisoners-list/>.

⁵ Los cargos imputados a Hla Phone obedecían a esa disposición y a otras dos.

Había preguntado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Myanmar por su papel en ese caso en particular, y recuerda que debería haberse prestado atención prioritaria a los malos tratos sufridos por esas niñas en lugar de ofrecerse mediación para que percibieran los salarios no abonados.

32. La Relatora Especial celebra el empeño puesto por el Gobierno, en colaboración con la OIT, para elaborar un plan de acción nacional en materia de trabajo infantil y una lista de formas de trabajo peligrosas que los niños han de tener prohibidas. Recuerda su llamamiento para que la edad de escolaridad obligatoria o de asistencia a otras modalidades de formación profesional se aumente de forma incremental a fin de que coincida con la edad de admisión al empleo y para que se ratifique el Convenio sobre la Edad Mínima, 1973 (núm. 138) de la OIT. Aunque es de celebrar la ampliación para 2017 del mecanismo de presentación ante la OIT de denuncias de trabajo forzoso, y observando que se han reactivado los grupos de trabajo técnicos y de alto nivel, es importante emprender iniciativas para adaptar el mecanismo a las necesidades locales.

33. El registro de los nacimientos es importante para hacer frente al trabajo infantil y garantizar el acceso a servicios esenciales. La Relatora Especial celebra la creación de la primera plataforma electrónica para el registro de los nacimientos y las iniciativas de ampliación del registro. Sin embargo, observa que la tasa de registro es alarmantemente baja entre los musulmanes del estado de Rakáin y en algunas zonas de los estados de Kachín y Shan afectadas por el conflicto. Propugna que se redoblen los esfuerzos por mejorar el registro de los nacimientos en esas zonas, especialmente en vista de las vulnerabilidades adicionales que a menudo presentan los niños afincados en ellas. En las zonas de Kachín no sometidas a control gubernamental no se reconocen oficialmente los documentos civiles expedidos por grupos armados étnicos, lo cual complica la matriculación en las escuelas públicas de los niños que están en posesión de documentos de ese tipo.

34. La Relatora Especial celebra que se hayan aumentado los presupuestos del Ministerio de Educación y del Ministerio de Asistencia Social, Reasentamiento y Socorro y que se haya ampliado la educación gratuita al ciclo secundario de enseñanza. Sin embargo, es preciso seguir esforzándose por garantizar el acceso a la educación a todos, especialmente a los grupos minoritarios. Le preocupa que no se reconozcan la titulación expedida a quienes han estudiado en escuelas administradas por organizaciones de base étnica, lo cual dificulta su acceso a puestos de trabajo y a otras oportunidades en las zonas sujetas a control gubernamental.

35. Se informa de que la situación socioeconómica del estado de Rakáin apenas ha sufrido variaciones, en la medida en que los musulmanes no han percibido mejora alguna durante el último año. Aunque en el ámbito de la asistencia médica han mejorado en cierta medida las instalaciones y la infraestructura, el número de profesionales de la salud cualificados y capacitados sigue siendo muy insuficiente⁶, y las autoridades siguen impidiendo que los musulmanes accedan a muchos hospitales municipales, incluso en situaciones de urgencia. La Relatora Especial reitera los llamamientos dirigidos a que todas las personas tengan acceso seguro a hospitales municipales sin sufrir discriminación. En cuanto al acceso a la educación, tiene entendido que en la zona rural de Sittwe hay una sola escuela de enseñanza secundaria a la que actualmente asisten los hijos en edad escolar de las familias expulsadas de nueve municipios a raíz de la violencia desatada en 2012. Los espacios temporales de aprendizaje, que solo imparten enseñanza primaria básica, suelen estar saturados y funcionan con un turno doble. Además, se informa de que en la zona septentrional del estado de Rakáin muchos maestros del estado no tienen deseo de regresar tras haber sido evacuados después de los ataques lanzados el 9 de octubre de 2016.

36. Pasados cuatro años, parece que desde 2012 no se ha avanzado en la búsqueda de soluciones duraderas para los 120.000 desplazados internos musulmanes que permanecen en campamentos del centro de Rakáin o para los 1.400 desplazados internos presentes en el municipio de Maungdaw. La adopción de decisiones sobre la asignación de recursos y la

⁶ Véase Centro para la Diversidad y la Armonía Nacional, *Rakhine State Needs Assessment II* (Yangon, 2016).

ampliación de los servicios prestados por organizaciones humanitarias internacionales se han visto estorbadas por la falta de información sobre los plazos y planteamientos relativos al regreso o reubicación de los desplazados internos. La Relatora Especial pide que se emprendan actividades humanitarias, de desarrollo y de consolidación de la paz de forma inclusiva, oportuna y sensible teniendo totalmente en cuenta la perspectiva de los derechos humanos para garantizar una transición más fluida a las soluciones, la paz y la reconciliación a largo plazo.

37. También es fundamental el derecho a una vivienda adecuada, del que forma parte la protección frente a los desalojos forzosos. Se ha informado de que en septiembre de 2016 el gobierno del estado de Rakáin empezó a identificar edificios presuntamente construidos sin permiso y a derribarlos. Parece ser que se identificaron en Maungdaw más de 2.200 edificios de ese tipo, entre ellos mezquitas y madrasas, más de 400 puestos comerciales y más de 1.600 viviendas residenciales. En Buthidaung se identificaron más de 1.000 edificios “ilegales”, entre ellos mezquitas, madrasas, puestos comerciales y más de 800 viviendas. Se ha comunicado que la demolición de estos edificios comenzó en noviembre de 2016. De las casi 1.000 estructuras presuntamente demolidas entre los casi 2.000 edificios de Maungdaw identificados, el 80% eran viviendas. También se han demolido unas 89 viviendas de las 285 identificadas en el municipio de Rathedaung. Presuntamente, en algunos casos se obligó a los residentes a demoler su propia vivienda o el personal de seguridad los sometió a extorsiones para evitar la demolición.

38. En todos esos casos, parece que no se facilitó a los propietarios y residentes afectados viviendas alternativas que cumplieran el criterio de adecuación⁷ ni el derecho a recursos jurídicos o de otro tipo que fueran adecuados y efectivos, algo que debe ponerse a disposición de quien afirme que se ha violado su derecho a la protección frente a los desalojos forzosos o que pende sobre él la amenaza de violación. En ese sentido, preocupa a la Relatora Especial que la demolición de esas estructuras forme parte de una aparente política gubernamental, más amplia y sistemática, de discriminación institucionalizada de la población rohinyá y musulmana del estado de Rakáin.

39. En Myanmar, donde se estima que el 70% de la población habita en zonas rurales, la tierra forma parte esencial de sus medios de vida; el fenómeno histórico y permanente de la confiscación de tierras sigue planteando problemas. La Relatora Especial celebra que el Comité Central de Examen sobre Tierras de Cultivo y Otras Tierras Confiscadas siga restituyendo tierras. Sin embargo, quedan sin resolverse más de 8.000 casos. Le preocupa que se enjuicie a quienes se oponen a las confiscaciones de tierras. Por ejemplo, en el estado de Shan se condenó a 72 personas a un mes de cárcel por intrusión en tierras de labor que habían sido de su propiedad, pero que presuntamente había confiscado el ejército.

40. En la Política Nacional de Aprovechamiento de las Tierras, aprobada en 2016 al término de amplias consultas, figuran importantes garantías, en particular con respecto al reconocimiento del uso consuetudinario de la tierra y las consultas comunitarias. Por ello preocupa a la Relatora Especial que pueda revisarse y, con ello, eliminarse ese orden de disposiciones esenciales. Propugna que se mantenga la protección de ese tipo y que se redacte una ley general sobre tierras que sea consonante con la política y con las normas de derechos humanos.

2. Desarrollo sostenible y empresas y derechos humanos

41. A medida que prosiguen las reformas en Myanmar es importante que los beneficios resultantes no se concentren en pequeños sectores de la población. Es probable que para ello sea preciso elaborar políticas relativas a cuestiones complejas en materia de reparto de recursos, procesos de adopción de decisiones para la aprobación de los proyectos de desarrollo y estrategias para hacer frente a la desigualdad creciente. La Relatora Especial recuerda la importancia de una forma de desarrollo sostenible centrada en las personas que proteja los derechos de las poblaciones locales.

⁷ Consta de los criterios de facilidad de acceso, asequibilidad, habitabilidad, seguridad de la tenencia, adecuación cultural, adecuación del lugar y acceso a los servicios esenciales, tales como la salud y la educación. Véase http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/Guidelines_sp.pdf.

42. La Relatora Especial ha seguido de cerca la evolución del proyecto de la mina de cobre de Letpadaung. Le preocupa que se siga sin rendir cuentas en relación con el asesinato de Khin Win en 2014. Toma nota de información preocupante sobre el desbordamiento en noviembre de 2015 de desechos posiblemente peligrosos, constantes enjuiciamientos de manifestantes, incluidos dos a quienes se imputó en junio de 2016, y otros 141 hogares sobre los que se cierne la amenaza de desalojo tras el anuncio de un plan de ampliación minera concertado sin haberse mantenido antes las consultas pertinentes⁸. Pide que se detenga el plan hasta que se mantengan consultas genuinas con las comunidades, que se fortalezcan las salvaguardias ambientales y que se siga investigando la muerte de Khin Win.

43. La Relatora Especial ya ha celebrado la adopción de procedimientos de evaluación del impacto ambiental (véase A/HRC/31/71, párr. 67), pero observa que, según se informa, no se están aplicando sistemáticamente y no se conocen bien los requisitos en materia de consulta. El Ministerio de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente le informó de que está redactando directrices para las consultas públicas gracias a las cuales cabe esperar que se mantengan consultas coherentes y serias.

44. Los proyectos mineros siguen teniendo repercusiones graves en la vida de las comunidades. La Relatora Especial tenía esperanzas de viajar a Hpakant para visitar a comunidades afectadas por la explotación minera, pero se le denegó la solicitud de viaje. Tuvo la suerte de reunirse con personas afectadas venidas de esta zona para encontrarse con ella en Myitkyina. Le presentaron un panorama sombrío dominado por la amplia destrucción del medio ambiente, niños con dificultades respiratorias debidas al polvo de las minas y más de 100 personas presuntamente muertas en accidentes de tráfico en los que estaban involucrados vehículos mineros.

45. La Relatora Especial celebra que el Ministerio de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente reconozca los principales problemas del sector y manifieste su intención inequívoca de resolverlos. Cabe celebrar, en particular, la decisión de suspender la expedición y renovación de licencias para la extracción de jade hasta que se reforme el marco jurídico. Observa que para aprovechar debidamente esa oportunidad convendrá conseguir que se revise el marco jurídico y normativo tras un proceso consultivo y garantizar mecanismos firmes de protección frente a los abusos contra el medio ambiente y los derechos humanos y frente a la corrupción. Preconiza el aumento de la transparencia en toda la industria minera mediante la publicación sistemática de información actualizada sobre los titulares de permisos y las condiciones de las licencias. Alienta al Gobierno a que adopte medidas apropiadas para investigar, castigar y reparar todo abuso contra los derechos humanos vinculado con actividades empresariales en todos los sectores y garantizar a las víctimas acceso a un recurso efectivo de conformidad con las normas internacionales.

46. La Relatora Especial observa que está programado que Myanmar presente en marzo su segundo informe en el marco de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, pero entiende que el país está solicitando una ampliación de ese plazo. Celebra la formación de un comité principal y la primera reunión del comité directivo en diciembre. Alienta al Gobierno a que forme con rapidez el grupo de partes interesadas nacionales múltiples y subraya que es preciso que, en colaboración con la sociedad civil, comience de inmediato la labor correspondiente al segundo informe. También pide que en ese informe se dé cuenta completa del sector del jade.

47. Actualmente, el sector textil de Myanmar emplea a unos 350.000 trabajadores, en su mayor parte mujeres. La Relatora Especial recibe con alarma la noticia de que algunas fábricas infringen las normas laborales, en particular obligando a los trabajadores a hacer horas extraordinarias y suspendiendo el pago de sueldos durante períodos de enfermedad⁹.

⁸ Véase Amnistía Internacional, *Mountain of Trouble: Human Rights Abuses continue Myanmar's Letpadaung Mine* (índice: ASA 16/5564/2017), disponible en www.amnesty.org/en/documents/asa16/5564/2017/en/.

⁹ Véase Martje Theuvs y Pauline Overeem, *The Myanmar Dilemma: Can the garment industry deliver decent jobs for workers in Myanmar?* (Amsterdam, Centre for Research on Multinational Corporations, Action Labor Rights and Labour Rights Defenders and Promoters, 2017).

Recuerda que las empresas tienen la responsabilidad de no causar abusos contra los derechos humanos ni de contribuir a ellos o estar directamente relacionadas con ellos. Exhorta a todos los inversores y empresas que operan en Myanmar a que se esfuercen por respetar los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos: Puesta en Práctica del Marco de las Naciones Unidas para “Proteger, Respetar y Remediar” y otras normas pertinentes, garanticen el respeto de los derechos humanos mediante políticas y procesos sobre el particular y hagan frente a toda consecuencia negativa para los derechos humanos en la que tengan alguna participación. Alienta a que se apliquen los principios de contratación responsable para velar por que los derechos humanos formen parte de las negociaciones sobre proyectos de inversión mantenidas entre Myanmar y empresas inversoras extranjeras. También es importante velar por que se mantengan consultas públicas genuinas en torno a los tratados bilaterales de inversión que se elaboren y por que esos tratados protejan la capacidad de Myanmar de legislar en aras de la protección de los derechos humanos.

D. El conflicto y el proceso de paz

48. Preocupan en gran medida a la Relatora Especial la persistencia y la intensificación de la violencia en Kachín, Shan y otros estados, así como el mayor impacto que han sufrido las poblaciones civiles. La situación se ha deteriorado considerablemente los últimos meses, y se le informa de que en el momento actual es peor que en cualquier otro momento de los años más recientes en la medida en que los enfrentamientos cada vez se acercan más a los centros urbanos y las zonas pobladas.

1. Desplazamiento y acceso

49. En el norte del estado de Shan quedaron desplazadas temporalmente unas 15.000 personas que constituían la práctica totalidad de la población de la zona de Mongkoe. Muchos han regresado ya, pero se informó a la Relatora Especial de que sigue estando restringida la circulación de entrada y salida a la ciudad. En enero de 2017 otras 4.000 personas presuntamente seguían desplazadas en el norte de Shan tras el recrudecimiento de los enfrentamientos en noviembre de 2016. En diciembre de 2016 el ejército de Arakan y el Tatmadaw (ejército de Myanmar) también libraron en el estado de Chin combates a raíz de los cuales quedaron desplazadas 200 personas; siguen desplazadas 2.000 personas tras los enfrentamientos registrados en el centro de Rakáin en abril de 2016. Cerca de 5.500 personas siguen también desplazadas en el estado de Kayin tras la violencia desatada en septiembre de 2016.

50. Se estima que en el estado de Kachín han quedado desplazadas recientemente 7.000 personas, entre ellas casi toda la población de tres campamentos para desplazados internos ubicados en zonas no sometidas a control gubernamental, como consecuencia de proyectiles caídos en las inmediaciones. Esas personas, que ya se habían visto desplazadas una vez, tuvieron que salir huyendo una segunda y, en algunos casos, una tercera vez, a menudo abandonándolo todo ante la necesidad imperiosa de ponerse a salvo. Algunos trataron sin éxito de cruzar la frontera con China. Muchos permanecen desamparados en la zona fronteriza sin acceso a una vivienda adecuada. Otros han llegado a zonas sujetas a control gubernamental. La Relatora Especial se reunió con algunos de ellos; una familia con cuatro hijos pequeños le dijo que se habían visto obligados a cavar un agujero en el bosque donde pernoctaron durante los seis días que pasaron buscando medios financieros para irse de la zona.

51. La ardua situación de los civiles de los estados de Shan y Kachín se ve agravada por los límites, cada vez más estrictos, impuestos al acceso humanitario. Durante más de ocho meses se ha denegado sistemáticamente a las Naciones Unidas y a otras organizaciones internacionales la autorización para pasar de zonas sujetas a control gubernamental a zonas no sujetas a ese control con el objeto de prestar asistencia esencial y, en ocasiones, imprescindible para la vida a más de 40.000 desplazados internos. El acceso a las zonas sujetas a control gubernamental es también objeto de restricciones cada vez mayores, al exigirse más niveles de aprobación, en particular la del mando militar septentrional. Cuando se concede un permiso, este suele estar limitado al personal nacional. Las

organizaciones locales, cuya capacidad es a menudo limitada, siguen proporcionando asistencia imprescindible, pero también encuentran cada vez más restricciones. La solicitud de la Relatora Especial de visitar Laiza para reunirse con los afectados de la zona se denegó por motivos de seguridad. A continuación pidió como alternativa que se le permitiera viajar a Mongkoe y otros lugares del estado de Shan, pero también le fue denegada la solicitud.

52. La Relatora Especial recalca que las Naciones Unidas y sus asociados deben tener acceso regular, independiente y previsible a todas las personas que necesiten asistencia humanitaria, con independencia de dónde se encuentren. Recuerda al Gobierno su voluntad de “asegurar que nadie se quede atrás”¹⁰ y le exhorta, así como al resto de los partidos, a que facilite de inmediato acceso sin trabas a todos los lugares que albergan desplazados internos. También exhorta al Gobierno a que retire oficialmente la inaceptable propuesta de que los desplazados internos tengan que atravesar grandes distancias y cruzar líneas de frente para recibir asistencia.

53. La Relatora Especial acoge con satisfacción el primer regreso voluntario piloto de refugiados de Tailandia, en el marco del cual regresaron 71 personas en octubre de 2016. Subraya que todos los regresos han de ajustarse a las normas internacionales. También observa que harán falta políticas claras para abordar cuestiones que podrían estorbar los regresos, como la seguridad, la remoción de minas terrestres, una vivienda adecuada, la restitución de tierras a los repatriados cuando ello proceda, la readquisición de documentos jurídicos vitales y la igualdad de acceso a los servicios públicos y a los medios de vida.

2. Infracciones relacionadas con el conflicto

54. Preocupan a la Relatora Especial las continuas informaciones de infracciones relacionadas con el conflicto cometidas por todas las partes, en particular de tortura, tratos inhumanos y degradantes, violencia sexual y por razón de género, ejecuciones arbitrarias, secuestros, incluso con fines de trabajo forzoso, y uso de escudos humanos, saqueos y confiscaciones de bienes.

55. También se ha observado una pauta alarmante de ataques presuntamente indiscriminados lanzados en zonas civiles o sus inmediaciones, en particular en emplazamientos para desplazados, escuelas y, en ocasiones, zonas donde no existen objetivos militares legítimos conocidos. En un incidente registrado el 12 de enero de 2017, se informó de que dos civiles, uno de ellos un niño de 6 años de edad, murieron por los efectos de proyectiles de artillería caídos en una aldea del norte del estado de Shan.

56. La violencia sexual y por razón de género, incluida la infligida por la pareja, sigue siendo un problema en todo el país, pero impera especialmente en las zonas de conflicto y las zonas donde la militarización va en aumento. Los supervivientes tienen limitado el acceso a servicios imprescindibles para la vida como consecuencia de la capacidad restringida de quienes los prestan y de los especialistas y de lo constreñida que está la libertad de circulación de las mujeres a raíz de la militarización en aumento. Se han recibido numerosas acusaciones de violaciones en el estado de Rakáin a manos de miembros de las fuerzas de seguridad con posterioridad a los ataques lanzados el 9 de octubre de 2016. Son pocos los supervivientes que pueden acudir a un lugar donde se les dispense la atención médica que necesitan. Los incidentes se denuncian en pocas ocasiones; solo un 50% de las mujeres del estado de Rakáin y un 18% de las mujeres del estado de Kachín aceptaron en 2016 la derivación a proveedores de servicios de salud. Esas cifras proceden de datos para la programación que representan solo una parte de los incidentes; la inmensa mayoría de los casos quedan sin denunciarse. Presuntamente se pide a los supervivientes que no denuncien a las organizaciones humanitarias los casos de violencia sexual y por razón de género; cuando presentan denuncias, en ocasiones sufren consecuencias por ello. Cuando se denuncian los casos sigue imperando la impunidad. Pasados dos años desde la violación y el asesinato en 2015 de dos maestras de Kachín,

¹⁰ Véase Htin Lynn, Director General del Departamento de Organizaciones Internacionales y Economía del Ministerio de Relaciones Exteriores de Myanmar, declaración pronunciada en la Cumbre Humanitaria Mundial, celebrada en Estambul (Turquía), el 24 de mayo de 2016. Disponible en <https://consultations.worldhumanitariansummit.org/bitcache/f6e4658e546e2b02b37aaa9f839c9f7641c69aca?vid=581020&disposition=inline&op=view>.

Maran Lu Ra y Tangbau Hkwan Nan Tsin, los responsables siguen en libertad. Todavía no se han resuelto los casos ya señalados de Sumlut Roi Ja y Ja Seng Ing.

57. Aunque se toma nota de la información del Gobierno en el sentido de que en 2015 y 2016 se juzgó en tribunales civiles a nueve militares acusados de violación, muchas causas de personal del Tatmadaw se siguen dirimiendo en consejos de guerra en lugar de trasladarse a tribunales civiles. En junio de 2016 se celebraron consejos de guerra contra siete soldados por el asesinato de cinco civiles; se les condenó a cinco años de cárcel. Siguen sin explicarse las circunstancias del asesinato ese mismo día de otros dos civiles en el mismo lugar.

58. En el estado de Rakáin la Relatora Especial se reunió con personas a las que se había detenido conforme al artículo 17, párrafo 1, de la Ley de Asociaciones Ilícitas (1908), lo cual es incompatible con las normas internacionales. Reitera su preocupación por la noticia de que durante los interrogatorios se torturara a algunas personas detenidas de conformidad con esa Ley. También le preocupa el caso de dos pastores religiosos de Kachín, Langjaw Gam Seng y Dumdaw Nawng Lat, que hablaron con periodistas tras el ataque con bombas lanzado contra su iglesia en Mongkoe. El Gobierno había negado en un principio estar implicado en su desaparición, pero posteriormente el Tatmadaw admitió haberlos detenido. La Relatora Especial entiende que han sido trasladados a una comisaría de policía y que han sido acusados con arreglo a la Ley. Se pregunta si se trata de un caso de represalia por haberse expresado y pide que se efectúe una investigación completa e imparcial y que se respeten las garantías procesales.

59. Ocho partes en el conflicto de Myanmar siguen apareciendo en la lista que figura en el informe del Secretario General sobre los niños y los conflictos armados (véase A/70/836-S/2016/360, anexo 1). La Relatora Especial celebra que desde 2012 se haya liberado de las fuerzas armadas a más de 800 niños y que se hayan mejorado los procedimientos de verificación de la edad. Reitera su llamamiento dirigido al Gobierno para que ratifique el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados y el dirigido a los grupos armados étnicos para que preparen planes de acción, en particular contra el reclutamiento de menores.

60. La Relatora Especial condena con toda contundencia la aparente y completa despreocupación por la vida de los civiles y subraya la necesidad de que todas las partes adopten de inmediato medidas para proteger a los civiles, respetar los derechos humanos internacionales y el derecho humanitario y poner fin a la violencia. Recuerda en particular el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra, que establece la protección de la población civil contra los tratos inhumanos y los atentados contra la vida y la integridad corporal en los conflictos armados no internacionales. Deben adoptarse medidas urgentes para garantizar investigaciones independientes e imparciales de todas las violaciones. También debe impartirse y ampliarse capacitación y sensibilización en torno al ejército y los grupos armados.

3. Proceso de paz

61. En medio de ese inquietante contexto, prosigue el proceso de paz. La Relatora Especial agradece los esfuerzos del Gobierno por dialogar con todos los grupos. La Conferencia de Panglong del Siglo XXI, celebrada del 31 de agosto al 3 de septiembre de 2016, contó con la asistencia de representantes del Gobierno, el Parlamento, el Tatmadaw y 18 grupos armados; quedaron excluidos otros tres grupos armados. Durante su reciente visita se le informó de que en el marco del proceso consultivo se habían entablado diálogos de ámbito nacional en tres regiones (estado de Kayin, región de Tanintharyi y Nay Pyi Taw). En breve se celebrará la siguiente conferencia de paz para toda la Unión; actualmente no queda claro si podrán participar todos los grupos. La Relatora Especial acoge con satisfacción las garantías de incorporación de los derechos humanos en las deliberaciones y subraya la necesidad de incluir los compromisos y mecanismos correspondientes a la rendición de cuentas y la no discriminación, así como las cuestiones relativas a la utilización común de las tierras y los recursos naturales y a las desigualdades arraigadas. Observa que está previsto celebrar en paralelo un foro para organizaciones de la sociedad civil y reitera el papel vital que cumple la sociedad civil en el proceso de paz.

62. La Relatora Especial celebra que haya aumentado la representación de mujeres en la Conferencia de Panglong del Siglo XXI, donde su asistencia supuso un 13% del total, a la vez que observa que ese porcentaje sigue siendo inferior al mínimo acordado antes, del 30%. Ha recibido garantías de que se procurará seguir aumentando la representación en la siguiente conferencia y espera que se alcance la proporción mínima. Subraya que, de conformidad con las resoluciones del Consejo de Seguridad 1325 (2000) y 1889 (2009), las mujeres deben estar representadas en todos los niveles, incluso en los cargos decisorios y directivos y en los mecanismos de aplicación. Observa con preocupación que la igualdad de género y los derechos de la mujer no se han reconocido como esfera prioritaria, al no formar parte de los 20 subtemas establecidos durante el proceso de paz. Recomendando que se estudie la posibilidad de establecer un grupo de asesoramiento en materia de género de ámbito nacional.

63. Myanmar sigue siendo uno de los países del mundo donde es más intensa la actividad minera; en 2015 se notificaron 159 víctimas¹¹ y en 2016 otras muchas. Preocupa especialmente a la Relatora Especial el riesgo que suponen las minas terrestres y otros restos explosivos de guerra para el número cada vez mayor de civiles desplazados, así como para las futuras labores de reasentamiento. Vuelve a exhortar a todas las partes a que pongan fin de inmediato al uso de minas terrestres y al Gobierno a que ratifique la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción. Pide que las actividades de remoción, detección, eliminación e instalación de vallas sean objeto de desarrollo prioritario o ampliación.

E. Los ataques lanzados el 9 de octubre de 2016 contra instalaciones policiales de la Guarda Fronteriza de Myanmar y sus consecuencias

64. El 9 de octubre de 2016, varios grupos armados de hombres presuntamente lanzaron ataques coordinados contra tres instalaciones policiales de la Guarda Fronteriza de Myanmar en el estado de Rakáin (en Kyee Kan Pyin y Nga Khu Ya, en el municipio de Maungdaw, y en Koe Tan Kauk, en Rathedaung). Además de, presuntamente, dar muerte a nueve miembros de la Fuerza de Policía de Myanmar, parece que los agresores armados se apoderaron de armamento y municiones. Las fuerzas de seguridad (el Tatmadaw, la Fuerza de Policía de Myanmar y la Guardia Fronteriza) respondieron de inmediato con una operación de contraataque que tenía por objeto perseguir a los agresores y recuperar los bienes sustraídos. El Ministerio de Defensa emitió el 14 de octubre una declaración en la que anunció que la operación inicial duraría tres meses y que esa duración podía prorrogarse.

65. Durante las posteriores operaciones de contraataque presuntamente surgieron nuevos enfrentamientos, el más grave los días 12 y 13 de noviembre. El Gobierno informa de que se registraron más de 20 ataques y emboscadas durante las “operaciones de remoción”, en el marco de los cuales se dio muerte a siete soldados, entre ellos al comandante de una columna, y a un agente de policía y se dejaron muchos más heridos. El Gobierno de Bangladesh presuntamente detuvo y devolvió al Gobierno de Myanmar a dos presuntos agresores que habían cruzado la frontera. Aparentemente, la información inicial sobre la procedencia, los motivos y otros detalles de los agresores se obtuvo durante el interrogatorio de estos dos detenidos y de otros dos sospechosos detenidos por las autoridades de Myanmar.

1. Falta de acceso a la información y a la población afectada

66. Inmediatamente después de los sucesos, el Gobierno amplió un toque de queda existente de las 19.00 a las 6.00 horas en Maungdaw y otros dos municipios. En relación con las “operaciones de remoción”, se declararon oficialmente afectados los municipios de Maungdaw, Buthidaung y Rathedaung, que quedaron cerrados al paso por motivos de

¹¹ Véase Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Terrestres y Coalición contra las Municiones en Racimo, *Cluster Munition Monitor 2016* (agosto de 2016). Disponible en www.the-monitor.org/media/2394895/Cluster-Munition-Monitor-2016-Web.pdf.

seguridad. Se suspendieron todas las operaciones y actividades humanitarias que normalmente se llevaban a cabo en esas zonas. Se marcharon de ellas los docentes, los trabajadores sanitarios y otros proveedores de servicios, y se ha informado de que en algunos casos se emplearon helicópteros militares para evacuar de los puntos más remotos a funcionarios públicos de Rakáin.

67. Al 21 de octubre de 2016 se estimaba que habían quedado desplazados unos 3.000 miembros de comunidades de Rakáin. Se informó de que se había sacado a algunos de Maungdaw en barco y se había alojado temporalmente a muchos en las ciudades de Buthidaung, Maungdaw y Sittwe. El gobierno del estado, organizaciones no gubernamentales y organizaciones religiosas se encargaron de atender sus necesidades, mientras que se rechazó la mayor parte de las ofertas de asistencia internacional procedentes de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales. En cambio, parece que los miembros de comunidades rohinyá desplazados al 21 de octubre, cuyo número estimado iba de 10.000 a 15.000, no habían recibido asistencia gubernamental de ningún tipo y que se les había alojado en comunidades de acogida de aldeas afectadas por operaciones de seguridad. No se permitió a las organizaciones humanitarias evaluar la situación ni actuar a favor de la población necesitada, pese a que estaban preparadas para ello. Como consecuencia de la falta de acceso humanitario, resultó muy difícil determinar con precisión el número exacto de desplazados y sus necesidades.

68. Al 4 de noviembre, a raíz de la suspensión de los servicios humanitarios que antes se prestaban en la mayor parte del norte del estado de Rakáin, más de 150.000 personas se habían quedado sin la asistencia en forma de efectivo y de alimentos y nutrición que había sido normal hasta entonces. Un total de 3.400 niños a los que ya se había diagnosticado malnutrición aguda grave carecía de acceso al tratamiento habitual que los mantenía con vida; más de 2.900 niños a los que se había curado de la malnutrición aguda grave no podían obtener su tratamiento complementario y corrían grave peligro de recaída; y era alto el riesgo de que los casos de 42.000 personas, entre ellas 37.000 niños, con malnutrición aguda moderada degenerasen en casos de malnutrición aguda grave¹². Se estima que 7.600 embarazadas tampoco podían acceder de forma constante a atención médica¹³. Presuntamente, miembros de la comunidad hindú de Maungdaw también eran víctimas de escasez alimentaria, falta de servicios médicos y otros problemas como resultado de las restricciones de la circulación y las operaciones de seguridad. Las Naciones Unidas y varias organizaciones humanitarias de Bangladesh estimaban que al 13 de febrero de 2017 unas 69.000 personas habían pasado a Bangladesh tras los ataques del 9 de octubre. El Programa Mundial de Alimentos (PMA) estimó que otros 24.000 rohinyás se habían quedado desplazados en la zona norte de Maungdaw. A fines de enero de 2017 había regresado la mayoría de los miembros de las etnias rakáin y mro a los que se había desplazado de su hogar, aunque en Maungdaw y Buthidaung seguían desplazados unos 272 rakáin y mro.

69. Posteriormente se fue permitiendo el acceso humanitario de forma incremental, en ocasiones casi caso por caso. Por ejemplo, al término de una misión diplomática dirigida por el Gobierno que estaba integrada por el Coordinador Residente y de Asuntos Humanitarios y los embajadores o jefes de misión de nueve embajadas y que visitó varias aldeas del norte de Rakáin los días 2 y 3 de noviembre de 2016, se expresó el compromiso de reanudar las actividades humanitarias. Sin embargo, con posterioridad al compromiso entre el 8 y el 10 de noviembre el PMA solo pudo entregar en cuatro aldeas raciones alimentarias correspondientes a dos semanas. Además, se trataba de entregas excepcionales que solo estaban permitidas si se encargaba de ellas personal nacional.

70. Inmediatamente antes de la visita de la Relatora Especial se anunció que se había permitido al PMA acceder a 43 comarcas (que abarcaban 151 aldeas) del norte de Maungdaw en el marco de la reanudación de las operaciones ordinarias en la zona, si bien

¹² Véase Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH), “Update on the situation in Rakhine State – 4 November 2016”, correo electrónico enviado al ACNUDH el 4 de noviembre de 2016.

¹³ Véase OCAH, “OCHA Update – Humanitarian situation in the northern part of Rakhine State, Myanmar – 13 December 2016”. Disponible en <http://reliefweb.int/report/myanmar/ocha-update-humanitarian-situation-northern-part-rakhine-state-myanmar-13-december>.

en el momento en que se redactó el presente informe seguía vigente la restricción al acceso de personal internacional. Al 2 de febrero de 2017, aunque en algunas zonas se habían vuelto a abrir dispensarios de salud y centros de nutrición, parecía que habían acudido a ellos menos personas, pues persistían las tensiones y la circulación seguía estando limitada en el marco de un régimen estricto de autorización de viajes.

71. Inmediatamente después de los ataques del 9 de octubre y las ulteriores operaciones de seguridad, era difícil obtener información sobre la situación imperante en el norte de Rakáin. No se permitió la entrada a medios de comunicación independientes, y aunque dentro de la Consejería de Estado se formó un “comité de información” gran parte de la información difundida parecía semejante a la difundida por el Ministerio de Defensa. Ante la subsiguiente presión internacional se permitió a un grupo de periodistas entrar en el norte del estado de Rakáin en el marco de una visita gestionada por el Gobierno que se extendió del 20 al 22 de diciembre de 2016. La zona a la que accedieron prácticamente coincidió con la de la anterior misión diplomática. No se presentó explicación alguna sobre la manera en que se había seleccionado a los participantes, y no parece que fueran muchas las noticias generadas por la visita. Una consecuencia trágica fue la presunta decapitación de un aldeano, al parecer como represalia por haber hablado con los periodistas. Siguen sin estar claras las circunstancias que rodearon a ese asesinato, aunque el Gobierno ha informado de que la responsabilidad recaía en el grupo responsable de los ataques del 9 de octubre y de otros 13 asesinatos notificados. Esa información sigue sin estar confirmada al día de hoy, y los medios de comunicación independientes y los observadores de derechos humanos siguen sin tener acceso al norte de Rakáin.

2. Denuncias de violaciones de los derechos humanos

72. Tras los ataques del 9 de octubre y la activación de las operaciones de seguridad, empezaron a recibirse noticias, en número cada vez mayor y de forma persistente, de graves violaciones de los derechos humanos sufridas por los rohinyás. El 24 de octubre la Relatora Especial y varios expertos de las Naciones Unidas expresaron públicamente su preocupación por las denuncias de ejecuciones sumarias, incluso de niños, y de detenciones arbitrarias, así como de incendios de viviendas y mezquitas en el marco de las operaciones de seguridad. Los expertos pidieron que se investigaran a fondo y de forma imparcial todos los presuntos casos de ejecuciones sumarias, extrajudiciales y arbitrarias y que se permitiera el acceso a las organizaciones humanitarias para que realizaran una evaluación de las necesidades, siguieran entregando asistencia y se ocuparan con urgencia y debidamente de la protección, las necesidades y el bienestar de las poblaciones afectadas¹⁴.

73. Pese a la falta de acceso a las zonas afectadas, siguen presentándose informes, en particular por parte de organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación internacionales, basados en imágenes por satélite y su análisis, así como en entrevistas con personas que han escapado del estado de Rakáin¹⁵. La respuesta sistemática del Gobierno a esas denuncias ha consistido en negarlas y desestimarlas. Aunque el Gobierno denegó la solicitud del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de permitir el acceso de un equipo al norte de Rakáin¹⁶, el Gobierno de Bangladesh permitió el acceso a un equipo de cuatro personas de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) para que se reuniera en Cox's Bazar con miembros de la población rohinyá que habían escapado del norte de Rakáin tras los sucesos del 9 de octubre. En el informe de incidente grave emitido el 3 de febrero se documentó un número aterrador de violaciones graves de los derechos humanos que aparentemente habían tenido lugar de forma generalizada y sistemática, “lo cual es indicio de que, con suma probabilidad, se han cometido crímenes de lesa humanidad”¹⁷. Las presuntas infracciones, recogidas en testimonios prestados por más de 200 rohinyás, constan de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y tratos inhumanos, violaciones y otras

¹⁴ Véase www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20742&LangID=E#sthash.

¹⁵ Véase Human Rights Watch, “Burma: military burned villages in Rakhine State”, 13 de diciembre de 2016. Disponible en www.hrw.org/news/2016/12/13/burma-military-burned-villages-rakhine-state.

¹⁶ Véase www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21042&LangID=E.

¹⁷ Véase www.ohchr.org/Documents/Countries/MM/FlashReport3Feb2017.pdf. Véase también A/HRC/32/18.

formas de violencia sexual y por razón de género, arrestos y detenciones arbitrarios, deportaciones y traslados forzosos resultantes de actos de violencia y persecuciones. Según los testimonios, los ataques lanzados contra aldeas rohinyás, que incluían la destrucción deliberada de viviendas y existencias de alimentos impidieron a los rohinyás seguir viviendo en sus aldeas, “lo cual creó un clima coercitivo análogo a una situación de desplazamiento forzado”. A ese respecto, el Alto Comisionado instó a Myanmar a que pusiera fin a las operaciones militares y emprendiera una investigación independiente.

74. Aunque la Relatora Especial tuvo acceso a cinco aldeas rohinyás de Maungdaw de las que procedían muchas denuncias de violaciones y habló con lugareños, las visitas tuvieron lugar a lo largo de apenas un día, con lo cual resultó difícil determinar la verdadera escala y la fiabilidad de las acusaciones presentadas. Además, aunque la Relatora Especial no fue objeto de vigilancia estrecha por parte de funcionarios gubernamentales o efectivos de seguridad mientras hablaba con miembros de la comunidad, se percató de que quienes hablaron se encontraban en un estado extremo de temor y ansiedad, y ve posible que informantes de la comunidad notificaran después a otros agentes que se habían mantenido esas conversaciones. Durante su visita al estado de Rakáin la Relatora Especial también visitó comunidades del estado, entre ellas una comunidad mro desplazada y una comunidad hindú. Observa que todas las comunidades mencionaron la mayor dificultad para obtener medios de vida tras los ataques del 9 de octubre, así como un estado de ansiedad y temor.

75. Una de las observaciones más llamativas escuchadas durante la visita a Maungdaw se refería a las “puertas colgantes”. Ya se ha notificado antes que durante las operaciones de seguridad se ordenó a los lugareños retirar las vallas que cercaban sus viviendas, patios, baños colectivos y estanques, presuntamente en medio de hostigamientos, detenciones y extorsiones sufridos por los lugareños. La observación de puertas exentas no rodeadas por vallas parece corroborar la veracidad de esas órdenes, que han hecho que las mujeres se sintieran especialmente vulnerables e inseguras, en la medida en que las instalaciones de baño y aseo están rodeadas normalmente por vallas de ese tipo. La Relatora Especial observó que, aparentemente, las autoridades de Maungdaw habían publicado en fechas anteriores de junio una instrucción por la que se prohibía levantar vallas de zinc en torno a las viviendas “bengalíes” y que presuntamente su aplicación se aceleró tras los ataques del 9 de octubre. Aunque esas instrucciones se justificaron alegando motivos de seguridad, parece que se trata de formas alternativas de intimidación, acoso y, en última instancia, discriminación en contra de la población rohinyá con el objeto de que sus condiciones de vida resulten insoportables.

76. También alarmaron a la Relatora Especial las noticias de que en algunas zonas se ha adelantado la actualización anual de la lista de integrantes de los hogares, que normalmente se prepara en enero. Presuntamente, esa labor estaba en curso desde principios de noviembre de 2016 en las tres ciudades septentrionales de Rakáin. Para muchos lugareños rohinyás y musulmanes, la única prueba actual de su condición jurídica en Myanmar consiste en figurar en la lista de integrantes de los hogares, de carácter obligatorio. Al encontrarse miles de ellos desplazados, y habiendo muchos más huido de sus hogares tras las operaciones de seguridad, corren el riesgo de no poder demostrar cuando regresan su condición de residentes legales en Myanmar si su nombre se ha eliminado en el curso de la actualización de la lista.

3. Mecanismos de rendición de cuentas

77. A pesar de los llamamientos iniciales para que se investigaran a fondo y de manera imparcial las denuncias de violaciones de los derechos humanos posteriores a los ataques del 9 de octubre, hasta el 16 de noviembre no se anunció la creación de una comisión presidencial de investigación de lo sucedido en Maungdaw. Parece que aproximadamente por entonces el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas había presentado una exposición informativa sobre la situación en Rakáin¹⁸. La Comisión Asesora para Rakáin, designada por el Gobierno y establecida en agosto de 2016, ya había aclarado que su mandato no contemplaba realizar investigaciones sobre derechos humanos.

¹⁸ Véase www.nytimes.com/2016/11/19/world/asia/myanmar-rakhine-rohingya-muslim.html?_r=0.

78. La Relatora Especial observó que la Comisión Presidencial de Investigación para Maungdaw está encabezada por el Vicepresidente I, antiguo comandante militar, y que entre sus miembros se cuentan otros antiguos militares, así como el Jefe de la Fuerza de Policía de Myanmar. Parece que no hay ningún representante de la comunidad rohinyá, aunque sí hay un miembro musulmán que es un antiguo Embajador de Myanmar de edad avanzada. Son también miembros un representante de la Fiscalía General, antiguos funcionarios de las Naciones Unidas de alto nivel, un miembro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Myanmar (antes del servicio diplomático), mujeres con experiencia en derechos humanos y representantes de otras confesiones y minorías étnicas. Aparte de incluir a algunos miembros que cuestionan la imparcialidad de la Comisión, no parece que su mandato contemple obligatoriamente la investigación de las denuncias de violaciones de los derechos humanos. Parece que en su informe provisional figuran afirmaciones de carácter general que no parecen basadas en una evaluación de la información y las pruebas disponibles, lo cual pone gravemente en duda su credibilidad.

79. La Relatora Especial ya ha expresado antes su preocupación por los métodos de trabajo de la Comisión. Observa que, a causa de esas deficiencias, Myanmar todavía no ha cumplido de forma adecuada su obligación de realizar verdaderas “investigaciones prontas, exhaustivas, independientes e imparciales” de las presuntas violaciones de los derechos humanos (véase el anterior párrafo 22). También observa que a principios de febrero se establecieron dos mecanismos, una comisión militar de investigación y una investigación policial. Parece que se trata de mecanismos estrictamente internos que no atenúan la necesidad de mecanismos independientes.

80. Durante su reciente visita la Relatora Especial planteó a las autoridades la cuestión de la presunta muerte de varias personas a las que se había detenido durante las operaciones de seguridad, entre ellas un antiguo empleado de las Naciones Unidas. Se le informó de que esas muertes habían sido consecuencia de problemas de salud previos. Aunque la Relatora Especial no pudo acceder a los informes de las autopsias realizadas en esos casos, le preocupa el tratamiento que se dispensa a los detenidos, en particular durante los interrogatorios, así como el acceso a tratamiento médico inmediato y adecuado. Parece que en muchos casos los sospechosos carecían de representación jurídica. Además, no se informó a sus familias de su detención, y muchas personas creían que se había dado muerte a sus familiares. La Relatora Especial pide que se informe inmediatamente a las familias de los detenidos del paradero de estos y que se respeten las garantías procesales.

81. No cabe duda de que la situación en Rakáin es compleja. La Relatora Especial reitera que deben atenderse con urgencia los agravios que desde hace mucho tiempo sufre la comunidad budista de Rakáin y observa que el estado de Rakáin es actualmente el más pobre de Myanmar. Debe garantizarse y considerarse prioritario el acceso de todas las comunidades, entre ellas la comunidad rohinyá, a la educación, la atención sanitaria y los medios de vida. La evolución más reciente complica una situación de por sí compleja. En todo Myanmar imperan y están arraigados el temor, la hostilidad y la falta de empatía hacia la población rohinyá. En ese sentido, la Relatora Especial se siente animada por el hecho de que más de 40 organizaciones de la sociedad civil locales hayan firmado recientemente una declaración en la que se pedía una investigación independiente de las consecuencias de los ataques del 9 de octubre. Alienta a todos los defensores de los derechos humanos de Myanmar a que se manifiesten a favor de los derechos humanos de todas las personas, entre ellas la población rohinyá, y actúen en consecuencia.

III. Conclusiones

82. Ya casi ha pasado un año desde que asumió el poder el nuevo Gobierno. La Relatora Especial observó en su anterior informe las enormes dificultades que tiene ante sí el Gobierno en el ámbito de los derechos humanos, estando obligado simultáneamente a sortear y dirigir una burocracia heredada del anterior Gobierno, así como a gobernar con sujeción a las limitaciones del marco constitucional, que antepone la autoridad militar a la civil. Recuerda que la consolidación de la democracia y la creación de una cultura de respeto de los derechos humanos es una tarea compleja que requiere voluntad política y una inversión sostenida no solo en la

mejora del funcionamiento y la integridad de las instituciones estatales, sino también en su rendición de cuentas.

83. Aunque han podido verse mejoras en algunos ámbitos y se aprecian esfuerzos claros en otros, como observó la Relatora Especial durante su reciente visita muchos ciudadanos comunes de Myanmar han empezado, por desgracia, a perder la esperanza en que el nuevo Gobierno se ocupe de sus necesidades y preocupaciones. Sin duda alguna, ello se debe, al menos en parte, a que el ejército y otras fuerzas de seguridad siguen gozando de impunidad y ocupando un lugar privilegiado en el Gobierno. La confianza depositada en los nuevos dirigentes civiles ha empezado a evaporarse en el marco de repetidos incidentes marcados por la impronta del anterior Gobierno. Cuando se formulan sospechas de abusos y violaciones, el Gobierno parece presto a recurrir a una posición invariable de “defender, negar y desestimar”.

84. Para que el nuevo Gobierno avance será fundamental plantar cara al aparente clima de impunidad. Esta sobreviene cuando los Estados dejan sin cumplir las obligaciones conexas, como la de investigar las violaciones; adoptar medidas adecuadas en relación con los autores garantizando el encausamiento, el juicio y el castigo apropiado de quienes son objeto de sospecha de responsabilidad penal; ofrecer a las víctimas recursos efectivos; y adoptar otras medidas necesarias para evitar que se repitan las violaciones¹⁹. La impunidad generalizada no hace sino propiciar actos de reacción punitiva proporcional y represalias entre quienes están involucrados en presuntos abusos y violaciones.

85. Actualmente, parece que las políticas, leyes y vías de reparación disponibles favorecen a quienes ocupan cargos de responsabilidad en lugar de garantizar a todos igualdad ante la ley e igualdad de oportunidades en cuanto a la atención de los agravios legítimos. Sigue haciéndose un uso indebido de las leyes para ahogar la libertad de asociación y de reunión y socavar la libertad de opinión y de expresión. Las personas que llevan generaciones viviendo en unas tierras siguen sufriendo desalojos sin salvaguardias debidas a causa de proyectos que les reportan pocos o ningún beneficio. A veces parece que el conflicto, que sigue teniendo un efecto devastador en los civiles, se concentra en torno a las zonas donde abundan los recursos o en las cercanías de proyectos lucrativos.

86. La Relatora Especial recuerda al Gobierno la distinción entre estado de derecho y estado por decreto en las ocasiones en que, con excesiva frecuencia, se trata imperfectamente de explicar los motivos de preocupación expresados aduciendo que se ha procedido al respecto “de conformidad con la ley”. También se cierran con excesiva frecuencia los casos de abusos y violaciones de los derechos humanos importantes e incluso graves cuyos autores podrían haber sido agentes del Estado, sin ofrecerse explicaciones o al amparo del encubrimiento justificado con el pretexto de la seguridad nacional. A la vez, se crea una plétora de comités o comisiones para que se ocupen de la misma cuestión conforme a mandatos redundantes, sin suficientes garantías de independencia e imparcialidad y con resultados confusos, no concluyentes y tardíos. Cuando un Estado es incapaz de respetar su obligación primordial de investigar las violaciones, imponer medidas apropiadas a los autores y ofrecer a las víctimas recursos efectivos, debe solicitar asistencia al respecto. Cuando no quiera proceder de ese modo, la comunidad internacional debe intervenir y dar un paso al frente.

IV. Recomendaciones

87. Las Naciones Unidas deben, bajo el liderazgo del nuevo Secretario General, adoptar un enfoque más amplio y coordinado en relación con su actuación en Myanmar que incluya la consolidación de la paz, el desarrollo y la asistencia humanitaria y gire en torno a los principios de los derechos humanos.

¹⁹ Véase el conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad (E/CN.4/2005/102/Add.1), principio 1.

88. La comunidad internacional debe:

a) Establecer una comisión de investigación encargada de investigar la discriminación sistemática, estructural e institucional en las políticas, el derecho y la práctica y la persecución de la que son objeto desde hace mucho tiempo los rohinyás y otras minorías del estado de Rakáin, haciendo especial hincapié en los incidentes de violencia observados en 2012 y 2014 y en las operaciones de seguridad posteriores a los ataques del 9 de octubre de 2016, que pueden equivaler a crímenes de lesa humanidad;

b) Mantener en el Consejo de Derechos Humanos, con carácter urgente y en el formato apropiado, un debate dedicado a Myanmar que se centre en las violaciones de los derechos humanos registradas en otras partes del país, en particular en la intensificación del conflicto en Kachín y el norte de Shan y en el aumento de la militarización en zonas como el estado de Kayin;

c) Exhortar al Gobierno de Myanmar a que cumpla el compromiso asumido a efectos de abrir en el país una oficina del ACNUDH con mandato pleno;

d) Seguir ocupándose de la situación de los derechos humanos en Myanmar en todos los foros intergubernamentales pertinentes;

e) Poner los derechos humanos en el primer plano de toda la cooperación bilateral con Myanmar y la inversión en el país y adherirse con determinación a los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos;

f) Velar por que todos los inversores y empresas de carácter nacional e internacional observen los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos y demás normas pertinentes en sus inversiones y operaciones en Myanmar;

g) Velar por que los Estados de origen de las empresas que operen en Myanmar cumplan sus deberes de protección de los derechos humanos, como exige el Consejo de Derechos Humanos en su resolución 31/24.

89. La Relatora Especial reitera todas sus recomendaciones anteriores dirigidas al Gobierno de Myanmar que aún no se han aplicado. En particular, reitera las que se indican a continuación.

90. Por lo que se refiere al estado de derecho y el espacio democrático, el Gobierno debe:

a) Modificar o derogar la legislación y las disposiciones legales que restringen las libertades fundamentales y contravienen las normas internacionales, incluidas las indicadas antes por la Relatora Especial y los anteriores titulares del mandato (véase A/HRC/31/71, anexo), para armonizarlas con las normas internacionales de derechos humanos.

b) Eliminar las sanciones penales de la Ley de Reunión Pacífica y Manifestación Pacífica y modificar o derogar el artículo 505 b) del Código Penal.

c) Examinar y modificar la Ley de Ciudadanía (1982) para armonizarla con las normas internacionales. En particular, eliminar las disposiciones que prevean la concesión de la ciudadanía sobre la base de la etnia o raza.

d) Resolver la cuestión de la condición jurídica de los residentes habituales de Myanmar, incluidos los antiguos titulares de tarjetas de registro temporal, y velar por que puedan obtener la ciudadanía en igualdad de condiciones y mediante un proceso no discriminatorio y voluntario.

e) Promulgar legislación sobre la prevención de la violencia contra la mujer y los derechos del niño que sea consonante con las obligaciones internacionales de Myanmar.

f) Iniciar un proceso de consulta con todas las partes interesadas, puede que estableciendo un comité preparatorio centrado en el examen y la enmienda de la Constitución para armonizarla con las normas internacionales.

g) Poner fin de inmediato a las detenciones arbitrarias y los enjuiciamientos de quienes ejercen sus derechos fundamentales, en particular su derecho a la libertad de reunión, de asociación y de expresión, y poner en libertad a todos los detenidos por haber ejercido esos derechos.

h) Realizar investigaciones prontas, exhaustivas, independientes e imparciales y garantizar sistemáticamente la reparación frente a todo acto de violencia, amenaza, intimidación o acoso contra miembros de los medios de comunicación y de la sociedad civil.

i) Condenar públicamente todos los actos de incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia hacia las minorías y defender la libertad de expresión.

91. En relación con el conflicto y el proceso de paz, el Gobierno debe:

a) Garantizar de inmediato la investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial de las denuncias de violaciones presuntamente cometidas en las zonas de conflicto y el enjuiciamiento y castigo de todos los responsables.

b) Velar de inmediato por que las Naciones Unidas y sus asociados tengan un acceso regular, independiente y previsible a todas las personas que necesiten asistencia humanitaria, con independencia de dónde se encuentren.

c) Garantizar una mayor participación de la mujer en el proceso de paz, especialmente en los puestos de liderazgo y concretamente en la próxima Conferencia de Paz de la Unión, con una cuota mínima del 30% y la integración de la perspectiva de género en los diálogos políticos.

d) Adoptar medidas específicas para elaborar un programa de apoyo integral a las víctimas y supervivientes de violencia sexual y por razón de género que incluya el acceso a la justicia, la salud y la atención psicosocial y apoyo socioeconómico, y adoptar las medidas necesarias para velar por que los responsables sean enjuiciados y condenados.

e) Poner fin de inmediato al uso de minas terrestres, ratificar la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción y ampliar la remoción de minas y artefactos sin estallar, el marcado y el vallado de las zonas minadas. Implantar actividades sistemáticas sobre el peligro de las minas e impartir educación al respecto.

f) Ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados.

g) Velar por la participación y la integración de las organizaciones de la sociedad civil en el proceso de paz.

92. En relación con el desarrollo y los derechos económicos, sociales y culturales, el Gobierno debe:

a) Garantizar el acceso de todos sin discriminación a servicios adecuados de salud, educación y otros servicios básicos, especialmente en el estado de Rakáin;

b) Garantizar consultas sistemáticas participativas, inclusivas y fructíferas con las comunidades en relación con todos los proyectos de desarrollo y el examen adecuado de todos los comentarios recibidos;

c) Velar por que se redacten con cuidado las modificaciones de la legislación, las normas, los reglamentos y los acuerdos en vigor o nuevos por los que se rigen las industrias extractivas y los grandes proyectos de desarrollo para asegurarse de que incluyan los requisitos de transparencia y contemplen la protección del medio ambiente, la protección social y la protección de los derechos humanos;

d) Velar por que se apliquen plenamente los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos y, mediante políticas y leyes adecuadas, proteger a la población de los abusos contra los derechos humanos cometidos en el territorio de Myanmar por terceros, incluidas empresas;

e) Ratificar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

93. Las autoridades del estado de Rakáin deben:

a) Realizar investigaciones prontas, exhaustivas, independientes e imparciales de todas las presuntas violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y exigir responsabilidades a los autores;

b) Levantar el toque de queda y las restricciones a la libertad de circulación en el estado de Rakáin;

c) Examinar y modificar todas las ordenanzas, instrucciones y demás normas y prácticas locales que sean discriminatorias de derecho o de hecho;

d) Adoptar medidas concretas para abordar los problemas persistentes en materia de desarrollo social y económico mediante un enfoque basado en los derechos humanos, al tiempo que se garantiza la participación de las comunidades afectadas, y promover la reconciliación y una mayor integración entre las comunidades;

e) Encontrar de inmediato soluciones duraderas para las personas que llevan desplazadas desde 2012.

94. Además, la Relatora Especial presenta al Gobierno de Myanmar las siguientes recomendaciones nuevas:

a) Cooperar en la concertación de puntos de referencia conjuntos que sean específicos y estén sujetos a plazos;

b) Realizar con ayuda internacional una investigación independiente e imparcial concluyente del asesinato de Ko Ni.

95. Por lo que se refiere al estado de derecho y el espacio democrático, el Gobierno debe:

a) Establecer un proceso de consulta apropiado y sistemático para la elaboración de leyes nuevas y el examen de las modificaciones de leyes anteriores a fin de garantizar la transparencia verificando el cumplimiento de las normas internacionales y la participación adecuada de las organizaciones de la sociedad civil y de representantes del público, tal vez mediante una ley sobre elaboración legislativa;

b) Velar por que los proyectos de ley, entre ellos los de la ley sobre el discurso de odio y la ley sobre seguridad privada y protección de los ciudadanos, se ajusten a las normas internacionales;

c) Crear un marco jurídico para la vigilancia respetando las normas internacionales de derechos humanos y manteniendo consultas con los expertos;

d) Mantener la moratoria sobre la pena de muerte con miras a su abolición.

96. En cuanto al desarrollo y los derechos económicos, sociales y culturales, el Gobierno debe velar por que se mantengan las protecciones previstas en la Política Nacional de Aprovechamiento de las Tierras y redactar, al término de consultas, una ley general sobre tierras que sea consonante con las normas internacionales de derechos humanos.

97. Las autoridades del estado de Rakáin deben:

a) Defender los derechos de los acusados velando por que se respeten y cumplan todas las garantías procesales y manteniendo a sus familias informadas de su detención o reclusión y de su paradero;

b) Abstenerse de dictar y aplicar nuevas órdenes e instrucciones que sean discriminatorias de derecho o de hecho o tengan un efecto desproporcionado en las comunidades musulmanas y rohinyás y de ese modo comporten un deterioro de sus condiciones de vida y su condición jurídica;

c) Conceder a los agentes humanitarios acceso normal, independiente y previsible al norte de Rakáin para que realicen evaluaciones de las necesidades y sigan

prestando asistencia y velar por que con carácter urgente se preste la atención debida a la protección, las necesidades y el bienestar de las poblaciones afectadas.

98. La Relatora Especial recomienda al Gobierno que se plantee la posibilidad de pedir a las organizaciones internacionales competentes, en particular al ACNUDH en el marco del establecimiento de una oficina en el país con mandato pleno, que faciliten asistencia técnica, creación de capacidad y apoyo en los siguientes ámbitos y a los siguientes órganos:

a) La administración de justicia, en particular respetando las normas de seguridad en la administración penitenciaria e instituyendo un mecanismo apropiado de presentación de denuncias;

b) La reforma administrativa y las normas de gobernanza;

c) Los derechos humanos en el proceso de paz;

d) El departamento de minería, con inclusión de ámbitos especializados como la geología;

e) Los parlamentarios, entre otras cosas en relación con las empresas y los derechos humanos.

Anexo

[Inglés únicamente]

Proposed joint SR-Government benchmarks

Constitutional, legislative and judicial reform

- (i) Initiate, by March 2018, a process of consultation with all stakeholders on the review and amendment of the Constitution, to bring it into line with international standards.
- (ii) Undertake, by October 2017, a comprehensive review of legislation and legal provisions that limit fundamental freedoms and contravene international standards including those previously identified by the Special Rapporteur and the previous mandate holders (see Annex A/HRC/31/71), with clear target dates for the conclusion of the review.
- (iii) Establish, by October 2017, a legislative reform process with clear timelines on the drafting and review of amendments to existing legislation or new draft bills by October 2017. The timeline should allow for the full consideration of the proposed laws.
- (iv) Establish, by October 2017, an appropriate systematic consultation process on drafting and review of amendments to existing legislation or new draft bills to ensure transparency and adequate engagement by civil society organizations and members of the public.
- (v) Establish a vetting mechanism to ensure amendments to existing legislation or new draft bills comply with international standards by October 2017.
- (vi) Amend or repeal, by October 2017, section 18 of the Peaceful Assembly and Peaceful Procession Law and section 505 (b) of the Penal Code, drop all charges currently being brought against individuals under these provisions; and ensure that multiple charges are not brought against individuals for the same offence.
- (vii) Amend or repeal the four “protection of race and religion” laws by October 2017.
- (viii) Review and amend, by March 2018, the Citizenship Law (1982) to bring it into line with international standards; and, in particular, remove any provisions that provide for the granting of citizenship on the basis of ethnicity or race.
- (ix) Resolve, by March 2018, the legal status of habitual residents of Myanmar, including former holders of the temporary registration card, and ensure that they have equal access to citizenship through a non-discriminatory process.
- (x) Take concrete steps, by March 2018, to continue judicial reform and the capacity-building and training of judges and lawyers to strengthen the independence and effectiveness of the judiciary.
- (xi) Enact, by March 2018, an overarching prison law which is in line with international standards, particularly in relation to the minimum standards of accommodation and access to health facilities.

Political Prisoners and Human Rights Defenders

- (i) Cease immediately the arbitrary arrest and prosecution of those exercising their fundamental rights including their rights to freedom of assembly, association and expression.
- (ii) Release all remaining political prisoners by October 2017.
- (iii) Undertake, by October 2017, a comprehensive review of all cases, based on broad and public consultations with all relevant stakeholders in view of the discrepancies in the numbers of remaining political prisoners.

- (iv) Develop, in consultation with all relevant stakeholders, including representatives of civil society, former political prisoners, representatives of the Ministry of Home Affairs, other relevant ministries and the National Human Rights Commission and parliamentarians, a formal definition of the term “political prisoner”.
- (v) Take concrete steps to provide adequate compensation and support, including psychological support and employment training, for released political prisoners by October 2017.
- (vi) Establish, by October 2017, a system to prevent the surveillance and monitoring of civil society and human rights defenders.
- (vii) Investigate and redress systematically any threats, acts of intimidation or harassment against media and civil society actors.

Rights of minorities, women and children

- (i) Publicly condemn all acts of incitement to discrimination, hostility and violence against minorities, while upholding freedom of expression.
- (ii) Take concrete steps to implement, by October 2017, a comprehensive set of measures to combat and prevent acts of incitement to discrimination, hostility and violence against minorities, including an anti-discrimination law or policy, while upholding internationally recognized human rights standards.
- (iii) Undertake, by March 2018, holistic prevention, education and awareness-raising measures addressing the root causes of discrimination, and promote interfaith and intercommunal dialogue.
- (iv) Enact, by October 2017, a law on the prevention of violence against women that is compliant with international law.
- (v) Take more effective measures to prevent and respond to all forms of sexual and gender-based violence, including in conflict.
- (vi) Take concrete steps to develop, by March 2018, a programme of comprehensive support for victims and survivors of sexual and gender-based violence in conflict, including access to justice, health and psychosocial care, and socioeconomic support, and take the necessary steps to ensure that perpetrators are prosecuted and convicted.
- (vii) Take concrete steps to create, by March 2018, a system for the collection of disaggregated data on all forms of gender-based violence in order to measure the scope and scale of the problem.
- (viii) Ratify, by October 2017, the ILO Convention 138 on the Minimum Age of Employment.
- (ix) Incrementally increase the age of compulsory education from 10 to at least 14 years.

Peace process and conflict-related issues

- (i) Ensure greater participation of women in the peace process, including in delegations, particularly in leadership roles, with a minimum quota of 30 per cent going forward and integration of a gender perspective into political dialogues.
- (ii) Ensure the full participation of local and affected communities, civil society organizations and women in the peace process, including at the State level and in implementation and monitoring mechanisms.
- (iii) Ensure prompt, independent and impartial investigations into allegations of violations committed in conflict areas, and the prosecution and punishment of all perpetrators.

- (iv) Ensure, by March 2018, the cases of members of the military who perpetrate serious crimes against civilians are systematically transferred to civilian courts.
- (v) Ensure that complainants are not penalized or threatened with legal action for bringing complaints and seeking redress against violations committed by the military.
- (vi) Immediately ensure that the United Nations and its partners have regular, independent and predictable access to all those in need of humanitarian assistance, wherever they are located.
- (vii) Conduct, by October 2017, a full verification count of all underage soldiers and ensure their release.
- (viii) Take concrete steps to end child recruitment in the armed forces, by March 2018, through strengthened age determination process in recruitment procedures, the improved enforcement of existing accountability, unhindered access and independent monitoring and oversight of all armed forces.
- (ix) Cease immediately the use of landmines and scale up the clearance of mines and unexploded ordnance, marking and fencing activities.
- (x) Develop, by March 2018, a strategy and timeline for comprehensive mine mapping and removal.
- (xi) Institute, by March 2018, systematic mine risk and education activities for communities in affected areas.
- (xii) Ratify, by October 2017, the Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-personnel Mines and on Their Destruction; prioritize the clearance of landmines and unexploded ordnance.

Rakhine

- (i) Grant immediate access for humanitarian actors to northern Rakhine State, to undertake a needs assessment and continue delivering assistance and aid, as well as ensure that the protection, needs and well-being of affected populations are urgently and properly addressed.
- (ii) Conduct a full, independent and impartial investigation to address allegations of serious human rights violations in Rakhine and hold perpetrators to account.
- (iii) Lift, by October 2017, the curfew order and restrictions on freedom of movement in Rakhine State.
- (iv) Review and revise, by March 2018, all local orders, instructions and other policies and practices that are discriminatory in law and in practice.
- (v) Take concrete steps, by March 2018, to address long-standing challenges to social and economic development through a human rights-based approach, while ensuring the participation of the communities affected, and fostering reconciliation and greater integration between communities.

ESCR and rights related to land

- (i) Ensure, by October 2017, that environmental impact assessment procedures are consistently implemented and enforced, and ensure that all relevant information is freely and easily accessible.
- (ii) Put in place, by October 2017, a mechanism for participatory, inclusive and meaningful consultations with the communities on all development projects and the proper consideration of all comments received.
- (iii) Take concrete steps to review, by March 2018, legislation, regulations and agreements governing extractive industries and major development projects to ensure they include transparency requirements and environmental, social and human rights protection.

- (iv) Draft, by March 2018, following consultations with civil society and affected populations, an overarching land law which complies with international standards.
- (v) Streamline, by October 2017, the complaints procedure regarding land disputes and ensure information on the process is widely disseminated to guarantee non-duplication and prevent gaps.
- (vi) Ensure, by October 2017, access to adequate health, education and other basic services for all, particularly in Rakhine State, without discrimination.

Engagement with international human rights mechanisms

- (i) Expedite the establishment of an OHCHR country office in Myanmar with a full mandate.
 - (ii) Ratify, by October 2017, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.
 - (iii) Ratify, by October 2017, the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict.
 - (iv) Ratify, by March 2018, the International Covenant on Civil and Political Rights, and all other core international human rights instruments.
-